JURISPRUDENCIA ELECTORAL

POR

MARTIN BASSOLS COMA

Profesor Agregado de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO

I. *Régimen de nulidades en materia electoral*: El principio de conservación de los actos electorales.—II. *Formación y estructura del censo electoral*: Duplicidad nombres en las listas no presume duplicidad de votos, salvo prueba en contrario a cargo del recurrente.—III. *Requisitos votación y papeletas*: 1. Nulidad votos emitidos en sobre que contenga más de una papeleta o con papeletas con cruces o signos (candidatura Congreso). Voluntad expresada mediante voto ha de ser clara e inequívoca al tener que ser sumada a la voluntad de los demás electores. 2. Nulidad votos con papeletas en las que figuran signos, rayas, dibujos, tachaduras, etc. El elector al ejercer un derecho-función debe observar un mínimo de seriedad al expresar su voluntad que ha de sumarse a la de los demás ciudadanos. 3. Requisitos formales papeletas Senado (señalamiento con una cruz nombre candidato): Observancia inexcusable. Los interventores del partido recurrente no hicieron protesta de anulación, lo que les convierte en partícipes de la irregularidad.—IV. *Escrutinio secciones*: 1. Irrelevancia falta de Acta de constitución de la mesa en el primer sobre, cuando aparece unida al segundo sobre del expediente electoral. 2. Juntas Provinciales carecen de competencia para anular actas y votos. No pueden computarse votos en base a certificación que pretende prevalecer sobre acta, ya que la legislación electoral no puede interpretarse extensivamente. Las certificaciones lo son de la votación, no de lo consignado en acta y en el presente caso el acta omite los resultados de las candidaturas. 3. Actas de las mesas no pueden ser suplidas a efectos de cómputo cuando las certificaciones presentan análogamente defectos: A) Actas escrutinio Sección. Improcedencia cómputo votos por apreciarse defectos insubsanables Actas de las Mesas, no pudiendo ser suplidos por Certificaciones que análogamente presentan defectos. B) Actas escrutinio Sección. Junta Provincial no computó resultados por existir contradicciones, improcedencia de suplir Acta por certificaciones por estar probado que ésta también contiene contradicciones. 4. Improcedencia suplir acta por certificación al resultar acreditado mayor número de votantes que electores.—V. *Recurso contencioso electoral*: 1. Poder de postulación. Existencia de poder general a representante candidatura, quien, a su vez, confiere poder para pleitos a Procurador de los Tribunales. 2. Ambito de la revisión jurisdiccional: A) Improcedencia alegación en vía contenciosa de falta precintado urnas, cuando no se formuló la preceptiva reclamación y protesta ante la mesa. B) Transcurridos los trámites para protestas y reclamaciones sobre legalidad votación no puede formularse protesta

alguna ni puede alegarse como motivo en vía contenciosa por cuanto puede dar lugar a indefensión otros partidos u obligarles a recurrir para prevenir consecuencias desfavorables por estimarse motivos extemporáneos. C) Protestas interventores deben hacerse en el momento de la lectura del acta en cada sección. Sólo así protesta puede calificarse de objetiva y hecha sin riesgo. Lo contrario —su alegación extemporánea en vía contenciosa— es faltar al principio de igualdad. D) Improcedencia reservar acta de escrutinio el derecho a examinar validez papeletas y votos con ocasión eventuales recursos contenciosos. Las protestas y reclamaciones tienen que hacerse en momento procesal oportuno. En caso contrario, se provoca indefensión y se haría interminable el escrutinio. La función de las Salas de lo Contencioso no es ni puede ser la de recontar la totalidad de los votos de las elecciones generales. 3. Prueba: A) Competencia de las Salas para subsanar errores materiales a la vista de las pruebas aportadas. B) Aportación del tercer sobre del expediente como medio de prueba

I

REGIMEN DE NULIDADES EN MATERIA ELECTORAL: EL PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LOS ACTOS ELECTORALES

“Que además de lo razonado, el párrafo último del número 4 del artículo 75 del Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 establece como norma general el principio de conservación del acto de proclamación de los candidatos electos, al determinar que «no procederá la anulación cuando el vicio del procedimiento electoral no fuere determinante del resultado de la elección» y que «la invalidez de la votación en una o varias secciones, tampoco comportará la nulidad de la actuación cuando aquélla no alterase el resultado final», lo que obligaba a la coalición recurrente a acreditar que precisamente en virtud de esos votos anulados su candidatura había obtenido tal número de sufragios que alteraba el resultado de la elección, y es evidente de la lectura del cuadro que de las 52 secciones ha unido la Junta Electoral al emitir su informe permite afirmar que esto no es así, a lo que hay que agregar que habiéndose adjuntado a las actas de muchas otras mesas las papeletas anuladas, el detenido examen de todas ellas permite afirmar que a la coalición recurrente le fueron anuladas un número de papeletas igual al de las papeletas anuladas a la coalición vencedora, por lo que es lógico presumir —y ello sin faltar a las normas de la sana crítica— que en las secciones ahora impugnadas debió ocurrir lo mismo, lo que equivaldría a restar o sumar los mismos votos a ambas coaliciones, manteniéndose así la diferencia existente entre ellas; todo lo que antecede obliga a desestimar este motivo de nulidad de la elección celebrada en el distrito de Tarragona y la necesidad de celebrar una nueva elección, lo que permite entrar a estudiar los motivos del recurso que se refieren a la nulidad parcial de la elección.” (*Sentencia 4/1979. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

II

FORMACION Y ESTRUCTURA DEL CENSO ELECTORAL: DUPLICIDAD NOMBRES EN LAS LISTAS NO PRESUME DUPLICIDAD DE VOTOS, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO A CARGO DEL RECURRENTE

“Ante posible duplicidad de nombres de las listas electorales en el municipio de..., distrito 1, sección 59, mesa 12; pero al alegarlo la coalición recurrente omite

el examen de las normas que rigen la formación del censo como si éste hubiera de constar de una sola lista, en la que se comprendan todas las personas con derecho a voto, actualizada al día de la elección; pero es lo cierto que el *censo que ha servido de base a las elecciones* convocadas el 29 de diciembre de 1978, *fue el ordenado hacer por la Orden de 14 de mayo de 1975*, con referencia al día 31 de diciembre de ese mismo año, habiéndose dictado las posteriores Ordenes de 26 de diciembre de 1975, según la cual el Instituto Nacional de Estadística procederá a la *rectificación anual, al 31 de diciembre de cada uno de los cinco años siguientes*, del censo electoral de residentes mayores de edad, vecinos, cabezas de familia, mujeres casadas y residentes de dieciocho, diecinueve y veinte años cumplidos, deduciéndolo del padrón, y añade que «si las circunstancias lo aconsejan podrá procederse a la refundición del censo electoral con sus rectificaciones posteriores, a fin de formar un listado único»; disposiciones posteriores han ido dando normas para la actualización del censo, y así, la Orden de 20 de diciembre de 1976 dispone que con las modificaciones producidas «las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística examinarán las listas de altas y bajas de cada municipio y si los comprendidos como altas o bajas deben ser anuladas o consideradas como electores», añadiendo que «encontrándolas adecuadas las diligenciará dándoles carácter de *listas adicionales del censo electoral*»; por su parte, la Orden de 18 de abril de 1977 establece que «en los municipios en los que las listas definitivas consten de hojas adicionales por no haber refundido el censo de 1975 con la rectificación de 1976, se ordenará por las Juntas Provinciales la refundición de las listas adicionales en número suficiente para que cada mesa pueda disponer de un ejemplar completo de la rectificación del censo de 1976»; otra nueva rectificación fue ordenada hacer por la Orden de 17 de noviembre de 1977, cuyo artículo 4 dispone que «con las fichas contenidas en el fichero electoral, los Ayuntamientos formarán las listas adicionales del censo electoral renovado de 1975, que comprenderá las rectificaciones hasta 31 de diciembre de 1977, consignándose en una sola lista las variaciones producidas en 1976 y 1977» ... y añadiendo el artículo 6 que antes del día 1 de abril del año 1978 las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística remitirán a los Ayuntamientos de la provincia las listas adicionales recibidas; por último, las dos Ordenes de 22 de diciembre de 1978 dan las normas para solicitar el alta de los mayores de dieciocho años, indicando el artículo 1 que antes del día 16 de enero de 1979 se podrá solicitar la inclusión en el censo de los no incluidos y que tengan dieciocho años o vayan a cumplirlos, disponiendo el artículo 5 que con las fichas enviadas por los Ayuntamientos y con las elaboradas por la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, éstas formarán *una lista adicional de altas* que se unirá como apéndice del censo electoral vigente; la segunda Orden de esa misma fecha establece las normas para la rectificación con las altas y bajas habidas hasta el 31 de diciembre de 1978, disponiendo el artículo 8 que se hará la rectificación de las listas adicionales del censo electoral ordinario de 1975, consignándose en una sola lista por sección las variaciones producidas hasta el 31 de diciembre de 1978, relacionando primero las exclusiones —bajas y modificaciones— y en segundo lugar las inclusiones —altas y modificaciones—, y precisando que «los Ayuntamientos que opten por la refundición mecanizada, formarán un listado único»; es evidente, por tanto, que en muy contados casos habrá listado único y que lo normal será la existencia del censo base del año 1975 con las listas adicionales correspondientes a los años 1976 y 1977, más las inclusiones de los mayores de dieciocho años ordenada hacer en el año 1978, más las listas adicionales también ordenadas hacer con referencia a 31 de diciembre de 1978; dispersión de listas evidente a la que son ajenas las mesas electorales y que viene

originada por las naturales variaciones de la población o censo electoral; pero es que, en todo caso, la duplicidad de nombres —en el caso de que se hubiera producido— no significa que haya habido duplicidad de votos, y siendo este el motivo que pudiera viciar la elección al tratarse de un hecho positivo y constitutivo, además del derecho de la coalición recurren, era a ésta a quien correspondía no ya la mera alegación del motivo, sino la prueba de que había votado más de una vez, por lo menos un elector, prueba que ni siquiera ha propuesto en este recurso, ratificando así la falta de reclamación inicial ante la mesa en la que se dice que se produjo esa irregularidad, por lo que hay que desestimar este motivo del recurso.” (*Sentencia 4/1979, de 18 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

III

REQUISITOS VOTACIONES Y PAPELETAS

1. *Nulidad votos emitidos en sobre que contenga más de una papeleta o con papeletas con cruces o signos (candidatos Congreso). Voluntad expresada mediante voto ha de ser clara y terminante y expresada en forma inequívoca al tener que ser sumada a la voluntad de los demás electores*

“Que el artículo 64 del Real Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977, en su párrafo 2, apartado *a*), declara nulos los votos emitidos «en sobre que contenga más de una papeleta», siendo indiferente que la papeleta sobrante sea de la misma candidatura o de otra diferente, ya que si son de dos candidaturas distintas surgirá la duda de cuál fuera la intención del elector entre dos opciones políticas o dos candidaturas, mientras que si ambas papeletas son de la misma candidatura (aparte de que el precepto de Ley así lo dispone, y ya sería ello razón suficiente), está evidenciando la voluntad del elector de infringir las normas de votación, que obligan a que cada sobre contenga una sola papeleta, como expresamente dice el artículo 54 del propio Decreto-Ley en su párrafo 2, inciso 2.º, por lo que hay que declarar bien anulados los votos contenidos en sobres con más de una papeleta; por lo que se refiere a las papeletas que contienen subrayados los nombres de los candidatos, o cruces, o signos al margen —referido ello naturalmente a la elección para el Congreso de los Diputados—, el propio artículo 64 del Decreto-Ley citado, en su número 2, apartado *b*), declara nulos los votos para el Congreso emitidos en papeletas en las que se hubieran modificado o tachado nombres de los comprendidos en ella o alterado su orden de colocación, por lo que no puede caber duda alguna de que la tachadura es causa suficiente de anulación, pero es que, además, el hecho de subrayar un nombre de los varios de la candidatura o distinguirlo de los restantes mediante cruces o signos de análoga naturaleza, ponen en duda la voluntad del elector que pudo ser o excluir al así señalado o destacado o, por el contrario, excluir a los no señalados, y como la voluntad expresada mediante el voto para poder computarse ha de ser clara y terminante, puesto que tiene que ser sumada a la voluntad de los demás electores, expresada de forma inequívoca, es natural que cuando se acepta la elección quien participe en ella deba hacerlo ateniéndose estrictamente a las normas por las que se rige, respetando la integridad de los documentos electorales y limitándose a introducir en el sobre las papeletas en la misma forma en que fueron entregadas en la imprenta, es decir, sin agregarlas signo o marca alguna, por lo que hay que concluir decla-

rando bien anuladas las papeletas en las que los nombres de los candidatos van subrayados, tachados o precedidos o seguidos de cruces o signos diversos.” (*Sentencia 10/1979, de 14 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

2. Nulidad votos con papeletas en las que figuran signos, rayas, dibujos, tachaduras, etc. El elector al ejercer un derecho-función debe observar un mínimo de seriedad al expresar su voluntad que ha de sumarse a la de los demás ciudadanos

“Respecto a la eficacia de determinadas papeletas en las que aparecen diversos signos en tinta o bolígrafo, signos que van desde la total tachadura de todos y cada uno de los integrantes de la candidatura o coalición, pasando por la escritura de versos o frases alusivas u otras parecidas en todo el anverso de la papeleta, hasta el subrayado de alguno de los nombres de los candidatos o a la colocación de una cruz o un aspa delante o detrás de alguno de esos nombres; respecto de este motivo la parte recurrente, después de su escrito de alegaciones, presentó ante esta Sala una fotocopia de unas instrucciones cursadas al parecer por la Junta Provincial del censo, y en las que recogía al parecer también otras de la Junta Central, escrito que carece de eficacia alguna, en primer lugar, por hacerse después de presentado el escrito de alegaciones y ser aplicable lo dispuesto en los artículos 69.3 de la Ley de la Jurisdicción en relación con el 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; en segundo lugar, se refiere a unas instrucciones de la Junta Provincial de A, y en el presente recurso se trata de impugnar las elecciones de la provincia de B, y en último lugar, porque nos hallamos ante una cuestión eminentemente jurídica que puede tener relación con la validez de la elección, y, por tanto, es esta Sala (y no otro órgano de la Administración) la única competente para resolver acerca de la validez de los votos emitidos, sin perjuicio de que las Juntas Electorales tengan competencia para pronunciarse sobre si las papeletas que van a ser utilizadas en la elección reúnen los requisitos exigidos por el artículo 55 del Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 y por el Decreto de 15 de abril del propio año; pues bien, en uso de esta competencia excluyente de cualquier otra hay que declarar la nulidad de todas a aquellos votos emitidos para el Congreso en papeletas que tengan signos, rayas, dibujos, firmas, tachaduras o señales distintos de los que la propia imprenta que las produjo, sean estos signos de la clase que sean, y tanto en su anverso como en su reverso, sin que pueda calificarse de rigorista esta postura, puesto que si el sufragio es una forma de representación política, si el elector o votante es un órgano del Estado —órgano-persona— que incluso ha sido calificado como un funcionario y el sufragio como una función que, siendo un derecho personal excede de este mero derecho, en su ejercicio deben observarse unas normas de comportamiento y, por tanto, si el elector vota debe ejercer su función con un mínimo de seriedad, que es lo que exige la expresión de una voluntad que ha de ser sumada a las voluntades de otros ciudadanos, seriamente emitida, para constituir la voluntad resultante, por lo que no puede quedar duda alguna sobre si la voluntad de un elector fue eliminar a un candidato —el subrayado o señalado mediante una cruz o un aspa— o, por el contrario, eliminar a los que no lo fueron; por tanto, si se participa en la elección, las papeletas deben depositarse en la misma forma en que se recibieron y no en otra distinta, porque en otro caso el elector aparentó tener dudas acerca de la persona o personas a las que quiere votar y además pone en dudas a los encargados de decidir sobre cuál fue su voluntad expresada por medio del voto; por ello, deben declararse nulas todas cuantas papeletas aparez-

can con cualquiera de los signos o señales mencionados en el principio de este razonamiento y declararse válidas únicamente las que fueron depositadas en las urnas en la misma forma en que fueron impresas, que es como deben ser facilitadas en los colegios electorales.” (*Sentencia 4/1979, de 18 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

3. *Requisitos formales papeletas Senado (señalamiento con una cruz nombre candidato): observancia inexcusable. Los interventores del partido recurrente no hicieron protesta de anulación, lo que les convierte en partícipes de la irregularidad*

“Que el último de los motivos alegados por la parte recurrente es que procede computar un total de hasta 55 votos, que fueron anulados en las mesas, secciones y distritos que enumera y ello pese a que —en su opinión— eran plenamente válidos todos ellos, distinguiendo dentro de esa enumeración hasta 41, votos que dice fueron emitidos en papeletas que no tienen defecto alguno, mientras que, según él mismo reconoce, en otras catorce papeletas, o se hicieron las aspas o cruces fuera del recuadro o se pusieron delante del nombre del candidato no proclamado, pero en número de dos o tres (por lo que es evidente que alguna de ellas estaba fuera de dicho recuadro), o bien se pusieron al margen derecho de la papeleta, y no al izquierdo, que es el lugar de situación del recuadro; con respecto de este motivo, hay que hacer las siguientes puntualizaciones: a) que el actor no ha probado que las papeletas que califica de «plenamente válidas» no fueron anuladas correctamente por causas distintas de llevar el signo fuera del recuadro, como podría ser el haber introducido en un sobre más de una papeleta, convirtiendo en nulos esos votos por aplicación de lo establecido en el artículo 64 del Real Decreto sobre normas electorales de 18 de marzo de 1977, y b) que el artículo 55.3 de ese Real Decreto establece que las papeletas destinadas a la elección para el Senado deberán expresar el nombre de los candidatos... precedidos de *un recuadro en el que el votante señalará con una cruz el nombre del candidato* o candidatos a que otorgue su voto, lo que está evidenciando que imperativamente ha de ponerse una sola cruz en cada candidato y que ésta no puede ser hecha en lugar distinto del recuadro señalado al efecto; por tanto, si se participa en una elección ha de ser con observancia plena de las normas por las que se rige, y no por otras que los votantes o los candidatos pretendan observar al margen del ordenamiento jurídico; ello obliga concluir que, en el caso más beneficioso para el recurrente, habría que declarar bien anulados los 14 votos de los 55 que pretende computar, por lo que la diferencia a favor del candidato proclamado sería aún de 42 votos, lo que hace que este motivo del recurso deba ser desestimado por no alterar el resultado de la elección; pero es que, como razona la representación del partido al oponerse al recurso, los interventores del partido recurrente no hicieron protesta alguna ante las mesas en el momento de producirse la anulación, lo que les convierte en partícipes de la irregularidad producida, que no puede ser alegada en este recurso electoral por aplicación de lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo; en todo caso, el recurrente menciona las papeletas que le fueron anuladas a su partido, pero no menciona las anuladas por la misma causa al candidato proclamado, a quien hay que suponer afectado en la misma proporción que el recurrente y ello dentro de un orden lógico y con arreglo a las reglas de la sana crítica, por lo que estando ambos candidatos en el mismo caso, seguirían existiendo las mismas diferencias, lo que hace que deba desestimarse este motivo del recurso.” (*Sentencia 10/1979, de 18 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

IV

ESCRUTINIO SECCIONES

1. *Irrelevancia falta de acta de constitución de la mesa en el primer sobre, cuando aparece unida al segundo sobre del expediente electoral*

“Que el motivo de nulidad alegado por la coalición recurrente es la falta del acta de constitución de la mesa 2 del municipio de X, motivo inexistente, puesto que si bien es cierto que dicho acta no aparecía en el sobre número 1; sin embargo, sí aparece unida al expediente electoral, pieza núm. 1, lo que significa —como la Junta Provincial informó— que existía ese acta en el sobre número 2, y el recurrente ha podido consultarla antes de insistir en este motivo del recurso como causa de nulidad de la elección; pero es que además del acta unida aparece que esa mesa se constituyó con el presidente y con los adjuntos, quienes en unión de cinco interventores; firmaron el acta, que aparece sellada con el sello de la sección y distrito correspondiente, por lo que hay que entender cumplido el requisito de la constitución de la mesa, sin que sea obstáculo que por una omisión no se incluyera un ejemplar del acta en el sobre número 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 del Real Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 al ser posible subsanar esa omisión acudiendo al contenido del sobre número 2, cuya función es indudablemente la de suplir al primer sobre en caso de extravío, destrucción, error u otro semejante; por todo lo razonado, hay que rechazar este motivo del recurso, carente en absoluto no sólo de entidad jurídica alguna para fundamentar una posible causa de nulidad, sino incluso de realidad, puesto que el actor parte de un hecho incierto.” (*Sentencia 4/1979, de 10 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

2. *Juntas Electorales Provinciales carecen de competencia para anular actas y votos. No pueden computarse votos en base a certificación que pretende prevalecer sobre el acta, ya que la legislación electoral no puede interpretarse extensivamente. Las certificaciones lo son de la votación, no de lo consignado en acta, y en el presente caso el acta omite los resultados de las candidaturas*

“Que el primer motivo por el que el actor pretende anular el acto de proclamación se basa en que en el municipio de una sección el acta fue declarada nula por la Junta Electoral Provincial en las operaciones de escrutinio general, pronunciamiento impugnado por el partido recurrente por dos motivos distintos: uno, por entender que la Junta Provincial carece de competencia para anular actas, y otro, porque entiende que el resultado electoral de esa sección debe ser computado por las razones que expone y, por tanto, sumar a los votos obtenidos por cada candidato los procedentes de esa sección, que son 243 para el candidato del partido A y 27 para el candidato proclamado del partido B; en cuanto a la primera parte del recurso, es evidente la razón que asiste al partido recurrente, ya que, según el artículo 68, núm. 3, del Real Decreto-Ley de normas electorales de 18 de marzo de 1977, las Juntas carecen de competencia para anular actas y votos, debiendo limitarse a verificar sin discusión alguna el recuento de los votos

admitidos en las secciones del distrito, ateniéndose estrictamente a los que resulten admitidos y computados por las resoluciones de las mesas electorales, y debiendo prescindir del cómputo de las actas en cuestión en los casos que el propio precepto enumera, por lo que debe declararse contrario a derecho el acuerdo adoptado por la Junta, en tanto en cuanto proclama la nulidad del acta, que podrá o no ser objeto de cómputo, pero que en ningún caso puede ser anulada, como se hizo en el acuerdo de 10 de marzo de 1979. En cuanto a la segunda parte de este motivo, esto es, si el resultado de la sección mencionada debe o no ser computado, el acta del escrutinio de la Junta Provincial expresa que el acuerdo de anulación se basó en que «la lista para el Congreso de los Diputados da 410 papeletas válidas, de las que están atribuidas un voto al partido C, otro al D y otro a B, sin venir los resultados de las votaciones candidatura por candidatura, como igualmente aparece respecto del Senado, presentándose por el partido D y C certificaciones completas firmadas por el presidente, adjuntos e interventor, con resultados enteramente distintos de los consignados en el acta», siendo este el motivo por el que la Junta, por unanimidad, acordó «no dar validez al acta, es decir, considerarla nula, porque no contiene los resultados de las votaciones candidatura por candidatura», originando la pertinente reclamación de los partidos D, C y A y motivando que en este recurso se pretende dar validez a la votación, y proclamando los resultados contenidos en los certificados acompañados, por entender la parte actora que la función de estos documentos es la de suplir las actas cuando éstas faltaren; mas esta tesis de la parte actora no puede ser acogida, ya que las normas electorales no pueden ser interpretadas extensivamente, y dar en todo caso preferencias a los certificados firmados sobre el acta radicalmente nula, puesto que ese y no otro es el vicio del acta, ya que según el artículo 66 del Decreto-Ley de normas electorales, éstas no sólo deben ir firmadas por el presidente de la mesa y por los adjuntos e interventores, sino que expresarán —imperativamente— el número de electores que haya en la sección, el de los votantes, el de los interventores que hubieran votado, el de papeletas válidas, nulas y en blanco, el de los votos obtenidos por cada candidatura, añadiendo que «se consignarán sumariamente las reclamaciones y protestas formuladas por los miembros o representantes de las candidaturas o por los electores sobre la votación y el escrutinio»; frente a tal documento, eminentemente formal, no puede prevalecer una certificación porque la certificación que según el artículo 66.2 pueden obtener los representantes de las listas y los miembros de las candidaturas, *no es un certificado de la votación, sino una certificación «de lo consignado en el acta»* y es evidente que si en un acta se omiten los resultados obtenidos por las candidaturas, y luego se extiende una certificado de ese acta haciendo constar resultados obtenidos por las candidaturas no se está certificando sobre lo contenido en el acta, sino sobre algo ajeno a ella, por lo que en el presente caso procede rechazar este primer motivo del recurso.” (*Sentencia 10/1979, de 18 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

3. *Actas de las Mesas no pueden ser suplidas a efectos de cómputo, cuando las Certificaciones presentan análogamente defectos*

A) *Actas escrutinio Sección. Improcedencia cómputo votos por apreciarse defectos insubsanables Actas de las Mesas, no pudiendo ser suplidos por Certificaciones que análogamente presentan defectos*

“Que cualquiera que haya sido la resolución adoptada por la Junta en otros casos, lo cierto es que, respecto de la Mesa Unica de la Sección del Distrito 6 del

Municipio, está bien denegado su cómputo, ya que, como se lee en la propia Acta del escrutinio de la Junta Provincial al abrir el sobre uno apareció el acta sin la firma de los componentes de la Mesa ni de los Interventores, abriéndose el sobre número dos, en el que apareció otro Acta con la sola firma del Presidente, aportándose por los representantes del partido X una certificación en la que aparecen los votos del Senado, sin firma alguna; pero es que, pretendiendo el actor el cómputo de los votos de esa Mesa, con el escrito de recurso, presenta tres certificaciones, una extendida a instancias del partido A, otra a instancia del partido B y una tercera para la Administración, en cada una de las cuales aparece solamente la firma del Presidente de la Mesa, pero no la de los adjuntos ni las de los Interventores; pero es que, las tres certificaciones presentadas, hacen que deba ratificarse el criterio de la Junta Electoral, puesto que en una de ellas se dice que el número de electores es de 345, en otra de ellas aparece este número muy corregido y casi ilegible, parece ser que por haber sido escrito encima de otra cifra de tres guarismos, mientras que según la tercera el número de electores parece ser de 366, puesto que las correcciones lo hacen ilegible, con la particularidad de que el único certificado que está sin corregir —que es el extendido a nombre del Partido B—, no es reproducción, mediante calco, de las otras dos copias anteriores, sino que varía en la forma en que están escritas las cifras (tanto en letra como en número) de los votos obtenidos por los electores, en la forma de estar fechado el certificado, e incluso en la forma y lugar de escribirse el número de votos nulos escrutados, por lo que ante la inexistencia de Actas válidas, y careciendo de fuerza probatoria las certificaciones, no podía computarse el resultado de la Sección, ni puede hacerse ahora como pretende el partido recurrente, debiendo ser desestimado este motivo de su recurso.” (*Sentencia 10/1979, de 18 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

B) *Actas escrutinio Sección. Junta Provincial no computó resultados por existir contradicciones, improcedencia de suplir Acta por certificaciones por estar probado que ésta también contiene contradicciones*

“Que en el Municipio, Sección 4 Mesa única, la Junta Provincial Electoral no computó resultado alguno; pero si lo hizo así fue porque, como se dice en el Acta del escrutinio aparecieron en los sobres 1 y 2 Actas contradictorias —si bien referidas al Congreso, ya que nada se dice respecto del Senado— por lo que el acuerdo adoptado ha de ser calificado como ajustado a derecho, puesto que el artículo 68.4 del Real Decreto-ley de 18 de marzo de 1977 establece en su párrafo 1 que en «el caso de que en alguna Sección hubiere actas dobles y diferentes, firmadas y rubricadas por todos los individuos de la Mesa, la Junta no hará el cómputo de ella», sin que tenga aplicación a este caso lo establecido en el párrafo 2 del propio artículo, que solamente permite aportar la certificación en el caso de que falte el Acta, en cuyo caso, no es que sea preceptiva su admisión, sino que «podrá suplirse» el Acta, siempre que el certificado esté en forma; no ha justificado el recurrente que la certificación aportada, coincidiera con el Acta, en lo referente al Senado, y como en el Acta del escrutinio se habla de la existencia de dos Actas contradictorias, hay que entender que para ambas Cámaras, a falta de prueba en contra, es indudable que la certificación que coincide con una de las Actas, estará en disconformidad con la otra, porque, se insiste, la certificación no es de la votación, sino del acta, extendida en forma, y lo que el actor pretende es dar prevalencia a lo certificado sobre el original de lo que se certificó, tesis que hay que rechazar, y por ello este motivo de su recurso.” (*Sentencia 10/1979 de 18 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

4. *Improcedencia suplir Acta por certificación al resultar acreditado mayor número de votantes que electores*

“Que el segundo motivo de impugnación se basa en que en el Municipio, el Acta fue anulada por la Junta, siendo expresamente impugnado este acuerdo por los representantes de los partidos A y B; es cierto que, como ya antes se dijo el artículo 68.3 del Decreto-ley de normas electorales, la Junta Provincial, en el momento del escrutinio no podrá anular ningún Acta ni voto, limitándose a verificar, sin discusión alguna el recuento de los votos emitidos, por lo que en principio la argumentación del recurrente parece perfecta, pero, sin embargo, subsanada dicha anulación de la Junta, que es contraria a derecho, debe procederse ahora —y la Junta lo debió de hacer así— a aplicar la norma contenida en el artículo citado, que en su número 4 dispone que en el caso de que el número de votos que figuran en el Acta de alguna Sección excedan del número de electores, la Junta no hará cómputo de ella; esto y no otra cosa es lo ocurrido en la Sección indicada, en la que según el Acta del escrutinio general el número de electores era de 543 pese a lo cual votaron 548 más los tres interventores, lo que hace que no pueda computarse el resultado que el recurrente pretende, y sin que pueda prevalecer el número de electores que figura en la certificación que aporta, ya que, además de tratarse de una copia defectuosa, tampoco cuadran los números, puesto que se dice que el de electores es de 551, el de votos válidos se dice que de 512, y, sin embargo, sumados los diversos votos atribuidos a cada candidato, solamente se obtienen 495 votos, por lo que hay que rechazar este motivo del recurso.” (*Sentencia 10/1979 de 18 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

V

RECURSO CONTENCIOSO ELECTORAL

1. *Poder de postulación. Existencia de poder general a representante candidatura, quien, a su vez, confiere poder para pleitos a Procurador de los Tribunales*

“Que en este recurso, la parte demandada, el partido A, alega como primer motivo de oposición una causa de inadmisibilidad, articulada al amparo de los artículos 73.3 del Decreto-ley de 18 de marzo de 1977, en relación con la ley reguladora de esa Jurisdicción, ya que dicho recurso está interpuesto no por el representante de una candidatura o de un partido o coalición, sino por un Procurador de los Tribunales, que dice ostentar la representación del partido B, pero pese a ello, no acompaña el acuerdo que para interponer el recurso debió adoptar la Comisión Ejecutiva de dicho partido, que es el órgano competente, como se deduce de la escritura de poder otorgada por el secretario general de ese partido, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, a favor de quienes han otorgado después el poder al procurador que interpuso este recurso contencioso; y como en caso de prosperar esta causa de inadmisibilidad, no sería posible entrar a examinar el fondo del recurso, es decir, si es o no válido el acuerdo de proclamación del senador electo, es obligado comenzar pronunciándose previamente sobre la legitimación discutida.

Que entre los documentos acompañados por el partido recurrente al escrito

formalizando el recurso contencioso electoral, existe una certificación expedida por el secretario general del partido B, que extracta los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva del partido en su reunión del día 22, en cuya reunión se confirió poder, entre otras personas a Y para que pudiera «realizar todos los actos relacionados con Elecciones Generales al Congreso de los Diputados y al Senado, designando representantes e interventores de candidaturas, así como para interponer, formalizar y seguir por todos sus trámites... recursos contencioso electoral o contencioso administrativo, con posibilidad de delegar dichas facultades en todo o en parte en quien tenga por conveniente»; por tanto, existe el acuerdo de la Comisión Ejecutiva del partido B, que el demandado estima necesaria para poder interponer el correspondiente recurso contencioso electoral, acuerdo además, adoptado por el órgano competente para hacerlo, según los Estatutos por los que se rige el partido (que está, por otra parte, debidamente inscrito en el Registro del Ministerio de la Gobernación) y siendo el señor Y quien otorga el correspondiente poder al Procurador de los Tribunales, que es quien interpuso el recurso contencioso electoral en nombre del partido B hay que concluir que para este caso concreto se cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos por los artículos 57 y 33 de la Ley reguladora de la Jurisdicción —aplicable con carácter supletorio según el Real Decreto-ley de 18 de marzo de 1977, artículo 73.1, porque en primer lugar, existe el acuerdo del órgano competente, que exprese la voluntad corporativa de interponer un recurso electoral, y en segundo lugar, existe el correspondiente poder otorgado al Procurador que lo interpone.” (*Sentencia 10/1979 de 18 de abril. Ponentes Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

2. Ambito de la revisión jurisdiccional

A) *Improcedencia alegación en vía contenciosa de falta precintado urnas, cuando no se formuló la preceptiva reclamación y protesta ante la Mesa*

“Procede rechazar todos aquellos motivos que se alegan en el presente recurso contencioso y que no fueron objeto de reclamación o protesta ante las respectivas Mesas cuando fueran éstas las competentes para resolverla, o ante la Junta Electoral Provincial cuando sea ésta la que hubiera adoptado el acuerdo que origina el recurso, y en su consecuencia, debe rechazarse la alegación del recurrente de que faltaba el precintado de las urnas de las Mesas 1 y de la Sección 3 del Distrito 1 del Municipio, ya que, como resulta de la lectura del folio 4 vuelto el acta de escrutinio general, el representante de X, allí presente, no hizo protesta alguna al dar lectura al acta de la Mesa correspondiente, en la que solamente se hizo constar la circunstancia de la falta de precinto de las urnas y que todos los Interventores presentes en la Mesa estuvieron conformes en comenzar la votación con las urnas sin precintar.” (*Sentencia 10/1979 de 18 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

B) *Transcurridos los trámites para protestas y reclamaciones sobre legalidad votación no puede formularse protesta alguna ni puede alegarse como motivo en vía contenciosa por cuanto puede dar lugar a indefensión otros partidos u obligarles a recurrir para prevenir consecuencias desfavorables por estimarse motivos extemporáneos*

“Que el procedimiento electoral, tal y como está regulado en las normas contenidas en el Real Decreto-ley de 18 de marzo de 1977 (aplicable a la elec-

ción discutida, por virtud de lo establecido en el Real Decreto de 29 de diciembre de 1978), distingue una serie de momentos en cada uno de los cuales han de realizarse unos actos concretos encaminados a la proclamación de los candidatos, concediendo a todos cuantos intervienen en la elección unos remedios para velar por la pureza de la elección o para defender sus derechos, si es que los entienden conculcados; en ese sentido, el artículo 64 en su número 6, obliga a los presidentes de las Mesas a preguntar a los integrantes de ellas, antes de firmar el acta si hay alguna protesta que hacer (y téngase cuenta que según el artículo 35 en cada Sección puede haber hasta dos interventores por cada candidatura); en este mismo sentido, el artículo 68, en su párrafo 6 permite que, «a medida que vayan examinándose las actas de votación, se podrán hacer y se insertarán en el acta del escrutinio, las reclamaciones y protestas a que hubiere lugar sobre la legalidad de dichas votaciones»; pues bien, transcurridos estos momentos que las normas electorales establecen, ya no puede hacerse protesta alguna, ni, por tanto, puede alegarse, como motivo de un recurso contencioso electoral, lo que pudo —y debió— ser alegado en la propia Mesa primero y ante la Junta Provincial Electoral después, porque ello puede significar indefensión de los otros partidos participantes en la elección, o en todo caso, obligarles a interponer diversos recursos electorales, para prevenir las consecuencias que pudiera producir la estimación de un recurso basado en motivos opuestos extemporáneamente; es por ello por lo que debe entenderse que todos aquellos fundamentos de este recurso que pudieron ser utilizados por vía de reclamación o de protesta ante las Mesas Electorales o ante la Junta Provincial Electoral y que no fueron ejercitados, no pueden servir luego para fundamentar un recurso electoral, puesto que sea ante las Mesas, sea ante esa Junta, en primer lugar, los partidos interesados hicieron dejación de ese derecho, que debieron utilizar precisamente dentro de un trámite o de un espacio de tiempo, y en segundo lugar, participaron en la formación de un acto que luego tachan de nulo, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo, según el cual «los vicios y defectos que hagan nulo un acto no podrán ser alegados por los causantes de los mismos», y es evidente que quien participó primero en una Mesa electoral, a quien se imputa la comisión de una irregularidad y se aquietó con ella, y luego en una Junta Provincial que realizó el escrutinio general no opuso su voluntad a la adopción de un acuerdo, sino que la suma a las demás voluntades concurrentes que lo adoptan, aunque propiamente no haya causado el vicio, por lo menos lo ha consentido al no ejercitar los remedios procedentes en el tiempo en que pudo y debió hacerlo, lo que le priva de acudir a otras instancias superiores, necesitadas de esta protesta o reclamación iniciales o intermedias como requisito imprescindible.” (*Sentencia 10/1979 de 18 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

C) *Protestas Interventores deben hacerse en el momento de la lectura del Acta en cada Sección. Sólo así la protesta puede calificarse de objetiva y hecha sin riesgo. Lo contrario —su alegación extemporánea en vía contenciosa— es faltar al principio de igualdad*

“Que el procedimiento electoral regulado en el Decreto-ley de 18 de marzo de 1977 (aplicable en este caso según el Real Decreto de 22 de diciembre de 1978) se divide en varios momentos o etapas, perfectamente definidas, en cada una de las cuales se realizan los diversos trámites necesarios para llegar al resultado perseguido: la proclamación de los candidatos elegidos por sufragio, estableciéndose en esas normas electorales unos medios de defensa que los apodera-

dos o representantes de los partidos o coaliciones han de hacer valer en su momento, de manera que no se produzca indefensión para las restantes candidaturas o coaliciones, mediante una protesta extemporánea o una extemporánea impugnación de un acto; a este respecto, y por lo que se refiere al escrutinio general, el artículo 68 del Decreto-ley citado ordena que, después de la apertura de cada sobre no se continuará la operación respecto de los demás hasta haberse terminado el escrutinio de los precedentes, y a continuación, en el párrafo 3 del mismo artículo, dispone que «a medida que se vayan examinando las actas de las votaciones de las Secciones se podrán hacer y se insertarán en el acta del escrutinio las reclamaciones y protestas a que hubiese lugar sobre la legalidad de dichas votaciones» lo que ha de interpretarse en el sentido de que se podrá o no utilizar el derecho a la protesta por los representantes de los partidos o coaliciones, pero si se utiliza ha de ejercitarse *precisamente* en el momento de la lectura del Acta de cada Sección y no después del recuento final y subsiguiente proclamación de los candidatos, porque quien participe en la elección no ha de esperar a conocer si su resultado le es adverso para alegar un vicio o les es favorable para no impugnarla, sino que está obligada a denunciar el vicio que cree que existe, en el momento preciso en que tiene conocimiento de él —en la Mesa— o cuando se computan los votos de esa Mesa en el escrutinio general, ya que solamente así la denuncia del vicio puede calificarse de objetiva y hecha a todo riesgo, es decir, sin saber si las consecuencias de la denuncia le benefician o le perjudican; lo contrario es faltar al principio de igualdad en el proceso electoral cuyas normas, si ya establecen unos momentos concretos para protestas o reclamaciones, es precisamente para obviar lo que la coalición recurrente hizo: esperar a conocer que la votación para el quinto escaño le había sido adversa por sólo 171 votos y solamente entonces impugnar el resultado; hay que añadir a lo anterior que ese silencio durante el escrutinio general es una continuación de la postura ya observada por la coalición recurrente, cuando sus Interventores por lo menos en 19 Mesas de las 52 ahora impugnadas, después de haber intervenido en las operaciones de escrutinio y admitir, por tanto, la destrucción de las papeletas que se anularon, no hicieron protesta alguna antes de firmar el Acta, participando con su conducta en la producción de esta pretendida causa de nulidad que ahora se alega y cuya invocación debe ser desestimada, en virtud de la doctrina que prohíbe ir contra los propios actos, recogidos en el artículo 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable al proceso electoral según el artículo 76 párrafo d) del Decreto-ley de 18 de marzo de 1977.” (*Sentencia 4/1979 de 18 abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

D) *Improcedencia reservar en el acto de escrutinio el derecho a examinar validez papeletas y votos con ocasión eventuales recursos contenciosos. Las protestas y reclamaciones tienen que hacerse en momento procesal oportuno. En caso contrario se provoca indefensión y se haría interminable el escrutinio. La función de las Salas de lo Contencioso no es ni puede ser la de recomtar la totalidad de los votos de las Elecciones Generales*

“Que otro tanto puede decirse de la *reserva* que cada candidatura hizo, por medio de sus representantes, en acto del escrutinio, «de su derecho a examinar las papeletas de los votos nulos en todas y cada una de las Secciones, con vistas a la interposición de los correspondientes recursos» reserva que la Junta resolvió —folio 11 del Acta— haciendo constar que «ésta tendrá carácter general para

todas las actas en que aparezcan votos nulos», y por cuyo procedimiento, ni lo celebrado puede calificarse de escrutinio, ni los resultados publicados podrían calificarse de tales, ni habría seguridad jurídica para los candidatos electos, puesto que la candidatura que no triunfó, haría uso de esa reserva de derecho, dejando así indefensas a las restantes; en todo caso, se haría interminable ese escrutinio, que, además, no sería practicado por la Junta Provincial (que es la que según el artículo 68 del Decreto-ley viene obligada a hacerlo), sino por una Sala de Justicia del Tribunal Supremo, cuya función ni es ni puede ser la de recomtar la totalidad de los votos de unas elecciones generales; era, pues, ante la Mesa en el momento del escrutinio, donde debió alegarse la validez de un voto anulado, reiterando la correspondiente protesta ante la Junta y si no se hizo así, la reserva de un derecho carece de valor alguno a efectos de fundamentar un posterior recurso contencioso electoral, sin la previa reclamación; es por ello, por lo que hay que rechazar este motivo del recurso, referido a la pretendida validez de votos anulados; pero es que en todo caso —y esto se dice para abundar en la desestimación de este motivo del recurso—, no podrían prosperar tampoco los argumentos del actor encaminados a dar validez a papeletas o votos radicalmente nulos, como son por ejemplo, los contenidos en sobres con más de una papeleta o las papeletas con los nombres de los candidatos subrayados o señalados mediante cruces, como se razona a continuación.” (*Sentencia 10/1979 de 18 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)

3. Prueba: A) Competencia de las Salas para subsanar errores materiales a la vista pruebas aportadas

“Que el primero de los motivos por los que el actor impugna la proclamación del quinto Diputado para el Congreso de los Diputados por la provincia, es el de haberse computado, por error, 93 votos menos a la coalición, que son los correspondientes al Municipio de X, Distrito II, Sección 1.ª, Mesa 2.ª, habiéndose hecho constar en el Acta esos 93 votos a favor del partido A, por mero error en la transcripción, ya que ambas candidaturas, en los impresos oficiales en las que se hacían constar los resultados de la votación de las Mesas, iban una a continuación de la otra, y se debió a un mero error el atribuir esos votos al partido A cuando en realidad eran de la coalición; respecto de este primer motivo, es evidente que la Junta Electoral Provincial cumplió estrictamente lo dispuesto en el Decreto-ley de 18 de marzo de 1977, aplicando en el escrutinio general los votos que cada partido o coalición habían obtenido según las respectivas Actas, y por ello, dando preferencia a esas *Actas sobre los certificados de las votaciones*, puesto que el artículo 68 del Decreto-ley citado solamente permite acudir a los certificados de los partidos «si faltase el acta», y evidentemente, en el caso debatido el Acta existía; por otra parte, la rectificación del error denunciado y debidamente protestado por la coalición recurrente en el momento oportuno del escrutinio general, significaba la anulación de votos, cuestión ajena a la competencia de la Junta, por disponerlo así el artículo 68.3 del Decreto-ley citado, según el cual «la Junta no podrá anular ningún voto, y sus atribuciones, se limitarán a verificar sin discusión alguna el recuento de los votos admitidos en las secciones del distrito ateniéndose estrictamente a los resultados admitidos y computados por las Mesas, según las actas o certificados, en su defecto...»; pero, sin embargo, la cuestión planteada sí puede ser resuelta por esta Sala, ya que la propia Junta Provincial es consciente de que pudo existir un error, error que en el presente caso, resulta acreditado por los siguientes medios de prueba: a) que

la propia Mesa, extendió dos certificaciones a los Interventores del partido B y de la coalición en los cuales hacía constar que los 93 votos en litigio, habían sido computados a la coalición, y en cambio el partido A no había obtenido en esa Mesa voto alguno; b) que repasando con minuciosidad las actas de la totalidad de los distritos electorales de la provincia, no existe ninguna Mesa —aparte de la discutida— en la que la coalición no haya obtenido ningún voto, siendo el mínimo de votos obtenidos el de 12, en una Mesa de 449 votos, habiendo obtenido en otras dos o tres 20 votos, y siendo mucho mayor el número de votos en las restantes, mientras que el partido A no ha obtenido voto alguno en muchas Mesas, siendo su número de votos de 1, 2, 3, 5, etc., llegando a un máximo de 20 votos en escasas Mesas; c) que aunque las declaraciones del Presidente de la Mesa y de los Interventores, así como del secretario del partido A por sí solas no serían suficientes para acreditar este hecho, por el tiempo y por la forma en que se produjeron, sí sirven para robustecer la opinión de que la Mesa, al extender el Acta de escrutinio, sufrió un error material, alterando las líneas o renglones en los que constaban los votos de cada coalición, atribuyendo al partido A los votos que en realidad se escrutaron a favor de coalición; por lo razonado, procede en este momento rectificar este error, y atribuir a cada partido o coalición los votos que el electorado le confirió y, por tanto, computar a favor de la coalición recurrente los 93 votos que en la Mesa 2.^a, Sección 1.^a, Distrito II de X fueron atribuidos al partido A, partido que no obtuvo en dicha Mesa ningún voto.” (Sentencia 4/1979 de 18 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.)

B) Aportación del tercer sobre del expediente como medio de prueba

“Que en la última parte del recurso, el partido A solicita que sean computados los resultados de dos Secciones que la Junta Provincial no computó; a este efecto, y para justificar las razones por las que entiende que deben ser computados los votos, solicitó el recibimiento a prueba que esta Sala acordó, y en cuyo trámite, fueron traídos al recurso los terceros sobres de ambas Secciones; del resultado de esta prueba se deduce que el acuerdo de la Junta es ajustado a Derecho, ya que el tercer sobre de la Sección contiene el Acta de constitución de la Mesa debidamente firmada, y también, debidamente firmada el Acta de Escrutinio, en el cual consta y así se escribe en letra que los electores de la Mesa eran 466, mientras que en número se dice que los electores de la Mesa eran 598, a continuación se expresa (en número) el de electores que votaron, que es de 466 más 3 Interventores no incluidos en las listas, y al hacer la asignación de votos para el Congreso, solamente se indica que obtuvo dos votos el candidato del partido B, un voto el del partido C y otro voto el del partido A, por lo que no puede darse validez alguna al Acta en cuestión ni es posible tampoco acceder al cómputo de votos solicitado; respecto a la Sección antes dicha es preciso destacar que si bien por telegrama se solicitó por esta Sala el envío del tercer sobre de la Mesa, lo enviado por el Juzgado de Distrito ha sido el correspondiente a la Mesa A Secciones 12 y 13 del Distrito 4, aunque en la cubierta del sobre propiamente dicha aparecen tachados los números 12 y 13 de la Sección y puesto encima el número 24; en el sobre remitido, aparece el Acta de constitución de la Mesa firmado por sus componentes y por los Interventores, pero en cambio no aparece el Acta de Escrutinio, y sí solamente un certificado de votación firmado por el presidente, los dos adjuntos y los tres interventores, y en él se dice que el número de electores de la Mesa era de 440 mientras que los votantes fueron 547, siendo los votos

válidos 530, un voto en blanco y 16 nulos; por tanto, al exceder el número de votantes del de electores, es evidente que el Acta está bien invalidada, y el acuerdo de la Junta ajustado a Derecho, al igual que lo está en el caso de la Sección antes dicha, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 54.2 y 66.1 del Decreto-ley de 18 de marzo de 1977, el primero de cuyos preceptos obliga a los adjuntos e interventores cerciorarse de que los electores están incluidos en el Censo Electoral (lo que evidentemente no hicieron, al admitir más votantes que electores tenía la Sección), mientras que el segundo de los preceptos citados obliga a los componentes de la Mesa a rellenar el Acta correspondiente, haciendo constar el número de votos obtenidos por cada candidatura, omisiones ambas que hacen que no pueda prosperar la pretensión del recurrente." (*Sentencia 10/1979, de 18 de abril. Sala 3.ª Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Martín Herrero.*)